



MATIAS DELACROIX/AP

Luego de la controversial conformación de un CNE, para un sector inconstitucional y para otro “amplio y plural”, bajo el amparo de los tribunales, a los mismos les tocó mover de emergencia varias piezas, ante la renuncia, sorpresiva para algunos, de Rafael Simón Jiménez, quien al momento de su designación por parte del TSJ, era visto como un equilibrio dentro de la parcialidad, lo cual otorgaba ciertos aires de credibilidad (para los no-abstencionistas) a un proceso electoral muy cuestionado

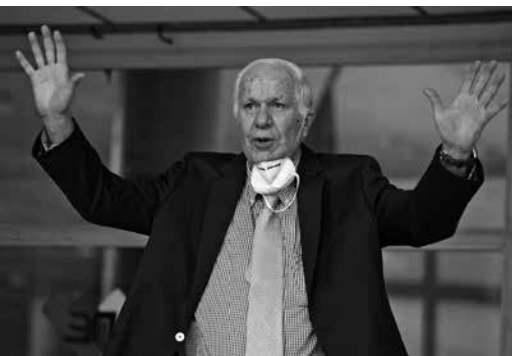
No pasaron dos meses de la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuando Rafael Simón Jiménez renunciaba al cargo de vicepresidente del ente comicial. Las razones que esgrime para su salida, son más de carácter *político*, pues considera que dentro del Poder Electoral se le imponía una *camisa de fuerza*, ante lo que él consideraba era su sentir militante.

Desde el momento en que los nuevos integrantes del Poder Electoral asumieron sus funciones, la actitud de Jiménez ha sido beligerante, sobre todo en temas controversiales: la participación o no de la oposición en las elecciones, la transparencia del proceso o la representación indígena en el Parlamento. Sus declaraciones generaban debate entre los círculos políticos del país.

La mañana del 6 de agosto comenzó a correr la informa-

ción: *Rafael Simón Jiménez va a renunciar al CNE*. Él mismo hacía una declaración a los medios dando sus razones, también dejando entrever la posibilidad de una candidatura para el próximo proceso electoral. Lo que no dejó a medias tintas fueron las denuncias de irregularidades ante lo que muchos ya ven como unas elecciones amañadas, poniendo el acento en la adquisición de las nuevas máquinas electorales a la empresa argentina Ex-Clé.

Ahora venía la duda sobre quién debía sustituir al rector saliente dentro del Poder Electoral. Según lo establecido en el reglamento, el rector suplente, Juan Carlos Delpino, era a quien correspondía llenar la vacante y, luego de su incorporación, el directorio del CNE elegía un nuevo vicepresidente. Desde el TSJ vendría la aclaratoria sobre ese tema, cuando la Sala Constitucional designa a Leonardo Morales, para suplir el puesto dejado por Rafael Simón Jiménez.



Rafael Simón Jiménez.

FEDERICO PARA/AFP

La designación de Morales, va en concordancia con lo acordado por los partidos de la Mesa de Diálogo quienes decidieron que el profesor universitario, y también militante de Avanzada Progresista, pasara a formar parte de la directiva del CNE, al momento de que se hiciera efectiva la sentencia del TSJ. Esta acción generó rechazo en varios sectores políticos, ya que el *nuevo rector*, a pesar de ser un conocedor en la materia electoral, hasta hace poco era el representante de su partido ante el ente comicial.

También se denunció la extralimitación en la que incurrió el TSJ ya que, al momento de ocurrir faltas absolutas o renunciaciones de algún rector principal, es sustituido por su rector suplente. Además, la ley establece que ningún rector puede tener militancia partidista alguna y su nombramiento recordó cuando Tania D'Amelio y Socorro Hernández fueron designadas, vía judicial, siendo activistas del PSUV.

Sin embargo y a pesar de todo este episodio, la fecha de las elecciones sigue inamovible. El cronograma avanza y se inician las inscripciones de los candidatos que aspiran a integrar la nueva Asamblea Nacional a partir del 5 de enero de 2021.

ELECCIONES INCONSTITUCIONALES

Varios exintegrantes del CNE han pedido al TSJ la nulidad del proceso electoral convocado para el próximo 6 de diciembre. Andrés Caleca, expresidente;

Eduardo Roche Lander, exvicepresidente; Ildemaro Martínez, exmiembro del directorio; Rafael Lander, vicepresidente y Eglée González Lobato, exconsultora jurídica, suscribieron el documento que fue entregado el pasado 3 de agosto al máximo tribunal del país.

Según los conocedores de la materia electoral existe *una franca violación del artículo 298 de la Constitución, el cual establece la prohibición de modificar leyes electorales seis meses antes de la fecha fijada para la elección*. Adicionalmente, denuncian que hay una modificación arbitraria del sistema electoral.

Además de la suspensión de las elecciones parlamentarias, los denunciantes solicitan declarar la *inconstitucionalidad de la omisión legislativa* para la designación de los nuevos rectores del CNE. También piden ajustar varias normas para resolver el tema de las postulaciones de los candidatos, así como que se aclare la asignación de los cargos a diputados, por medio del *cociente electoral nacional*, para así dar fiel cumplimiento a lo escrito en la Carta Magna.

Los exintegrantes del Poder Electoral, consideran fundamental que se restablezca el Estado de derecho y que unas elecciones en condiciones acordes a lo establecido en la legislación, cumpliendo los estándares internacionales, puede ser un primer paso. Adicionalmente, iniciaron una campaña vía web para sumar mayores apoyos a la iniciativa, al momento de realizar esta reseña, habían recabado más de 4 mil firmas, a través de la plataforma change.org.

Por ahora queda esperar qué decide el TSJ al respecto y saber si algún cambio en el panorama pudiera postergar unas elecciones que se ven inamovibles.

VEINTISIETE PARTIDOS ASEGURAN QUE NO VAN

Varias organizaciones de carácter político decidieron no

participar en el proceso electoral convocado para el 6 de diciembre, las más destacadas son: Acción Democrática, COPEI, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, La Causa R, Encuentro Ciudadano, Bandera Roja y Proyecto Venezuela.

Los partidos políticos, por medio de un documento, ponen diez condiciones para poder participar en las próximas elecciones, poniendo énfasis en la observación internacional, comportamiento adecuado de los funcionarios militares, campaña equitativa y habilitación de líderes políticos, así como la devolución de las tarjetas electorales a sus autoridades legítimas.

El llamado de abstención de estas organizaciones se queda insuficiente para muchos, ya que no indica una estrategia de cara al evento electoral; también choca con las demandas de ciertos sectores de la vida nacional que ven con preocupación que la abstención se traduzca en inmovilidad ciudadana.

Desde el *interinato* avalan el comunicado e insisten en que no se puede avalar una farsa, apalancándose en lo dicho por gobiernos como el de los Estados Unidos que afirman no reconocer una elección que *no cumpla con las condiciones mínimas*.

El sector oficial se siente cómodo ante el escenario: desmovilización ciudadana por la pandemia y una oposición fracturada, lo que le permite desarrollar su política y poder tomar control parlamentario, por una vía legal muy cuestionada.

LA PANDEMIA VA EN CRECIMIENTO

El mes de julio los casos por COVID-19 alcanzaron la cifra de 12.742; sin llegar a la mitad del mes de agosto, ya los contagios alcanzan los 11.795. Los días 11, 12 y 13, se superaron los mil nuevos casos diarios; en 72 horas se rompían los récords de contagios del día anterior.



FEDERICO PARRA/AFP

Dentro del Gobierno se sigue manteniendo cierto control, sobre todo respecto a la información de la pandemia. A diario sus voceros dan el reporte sobre los casos de COVID-19 y mantienen la centralización en las pruebas para detectar el virus en las personas, lo que origina retraso en los resultados y, según denuncian los expertos, han ocurrido muertes por sospecha del virus, pero que nunca recibieron la confirmación de las pruebas.

También es evidente que la enfermedad circula entre los altos círculos del sector oficial: el contagio de Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Tareck El Aissami, son muestra de ello. El fallecimiento de Darío Vivas por complicaciones del COVID-19, puso en alerta sobre el peligro del virus y la vulnerabilidad de las personas, sin importar su condición social o tendencia política.

Parece que lo advertido por la Academia hace un par de meses, se está cumpliendo. Los altos números de contagios a nivel nacional son preocupantes, sobre todo si destacamos que, desde el inicio del confinamiento a mediados de marzo, Venezuela supera los 30 mil contagios, siendo la región capital (La Guaira, Miranda y Distrito Capital) la que concentra el 44 % de los casos.

Habrà que esperar las próximas medidas que tome el Gobierno para evitar más contagios, sobre todo cuando el confinamiento no ha sido acata-

do a cabalidad, ya que muchos ciudadanos se ven obligados a exponerse al virus para poder buscar el sustento diario para sus familias.

Entretanto, recordemos que la crisis de los servicios públicos ha igualado tanto a ricos como pobres, afirmó el pasado mes Luis Pedro España, quien reveló que la pobreza en Venezuela alcanzó a 65 % de los hogares y la carencia de servicios afecta a todas las escalas de la población.

VUELVE DIRECTV

Al momento de cerrar esta reseña, llegó la noticia de que DirecTV retomaba operaciones, a través de la empresa Scale Capital, quien compró los derechos de funcionamiento de la empresa satelital para operar a nivel nacional.

Así, lo que en un momento parecía una actualización de *software* de los decodificadores, resultó ser el reinicio del servicio satelital en Venezuela, lo cual beneficia a más de dos millones de suscriptores, quienes disfrutarán de la programación de los diferentes canales de forma gratuita, por los próximos tres meses.

A finales de julio Juan Guaidó afirmaba, a través de las redes sociales, que *no había impedimento jurídico para la restitución de la señal de DirecTV en el país*, agregando que era el gobierno de Nicolás Maduro quien hacía el impedimento.

A nivel oficial, Conatel informó que la restitución del servicio estaría *cumpliendo las disposiciones legales dictadas por el TSJ para la protección de sus usuarios y usuarias*. Además, Scale Capital difundió un comunicado donde confirmaba la adquisición de los derechos de DirecTV en Venezuela, logrando un acuerdo con DirecTV Latin America LLC, y el Estado venezolano para funcionar a través del sistema satelital; también se anunció la designación de Alexander Elorriaga como presidente de la compañía, personaje conocedor del mercado por su antigua relación laboral con DirecTV Venezuela.

Ahora es fundamental hacerse las preguntas: ¿Quién se beneficia de esta acción? ¿Cuál de los dos gobiernos cobrará el rédito político por la medida? ¿Cuánto será el precio que costará el servicio luego de los tres meses gratuitos?

LA CEV CAUSA REVUELO

El 11 de agosto la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) causó revuelo entre algunos sectores de la sociedad venezolana quienes expresaron abiertamente en sus redes sociales posturas antagónicas, inconformidad y confusión en relación al comunicado oficial pronunciado por la máxima jerarquía católica ante las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela.

Ante el llamado a no acudir a los comicios por parte de 27 organizaciones políticas de oposición el domingo 2 de agosto, la presidencia de la CEV advierte que, sin una ruta definida, llamar a la abstención no conducirá a nada. Finalizan instando al liderazgo político a dejar de lado sus propios intereses para promover el bien común.